

Audiencia Pública
Comisión del Congreso de Seguimiento de la Ley de Víctimas

Intervención de Bruno Moro
Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas

21 de septiembre de 2011

Honorables Senadores y Representantes miembros de la Comisión del Congreso de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas:

Es un honor para mí como Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia estar en este recinto para presentar las conclusiones preliminares recogidas en el evento sobre la implementación de la Ley de Víctimas realizado el pasado lunes 19 de septiembre por las agencias de las Naciones Unidas, con la participación de representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

El Sistema de las Naciones Unidas se ha comprometido a apoyar los esfuerzos del Estado y de la sociedad colombiana para la adecuada reglamentación e implementación de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, “Por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Este compromiso fue asumido directamente por nuestro Secretario General en el acto de sanción de la Ley, en el cual se refirió a la importancia de que la Ley tenga un efecto transformador en las vidas de las víctimas, y reiteró la decisión de nuestra organización de contribuir a materializar este propósito.

El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia ha reconocido la importancia histórica de la Ley de Víctimas y Resitución de Tierras en un contexto de conflicto armado de más o menos 5 décadas, en tres aspectos fundamentales: (i) el reconocimiento de las víctimas y sus derechos; (ii) el propósito de reparar los daños causados por los actores del conflicto; y (iii) la posibilidad de construir una paz sostenible y digna, así como lograr la reconciliación.

Por esa razón, apoyamos de manera decidida el proceso de discusión y debate legislativo de la Ley, asesorando sobre los estándares internacionales de derechos humanos y buenas prácticas internacionales, así como favoreciendo espacios de participación de las víctimas.

Ahora que la Ley ha sido aprobada, es nuestra intención continuar con este apoyo en el proceso de implementación, que de manera inmediata requiere crear una estructura institucional nueva, y desarrollar los decretos reglamentarios que le den contenido al marco general de medidas de atención y reparación a las víctimas previstas en la Ley. Con ese propósito, convocamos el seminario del lunes pasado, que tenía tres objetivos principales:

- 1) Facilitar un espacio en el cual los representantes de la sociedad civil pudieran recibir de las autoridades del Estado información actualizada sobre los avances

más importantes que han dado las instituciones en la implementación de la ley de víctimas;

- 2) Propiciar la reflexión, el debate y el intercambio de propuestas de la sociedad civil sobre elementos a tener en cuenta en el proceso de creación de instituciones y desarrollos normativos para la implementación de la ley de víctimas; y
- 3) Dar la oportunidad a la comunidad internacional de identificar necesidades y oportunidades de cooperación.

Durante la jornada de la mañana, contamos en primer lugar con una breve presentación sobre el marco institucional y reglamentario que se debe desarrollar, a manera de contexto para las presentaciones y discusiones que tuvieron lugar durante el día.

A continuación, tuvimos la oportunidad de recibir de parte del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, información sobre los avances que ha dado el gobierno hasta la fecha para la implementación de la Ley de Víctimas. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales también tuvieron un espacio para compartir sus inquietudes sobre la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño institucional y desarrollo normativo.

La jornada de la tarde estuvo dedicada al trabajo temático. Hubo 8 mesas de trabajo en las cuales los representantes de la sociedad civil discutieron propuestas e inquietudes para aportar a la reglamentación en las áreas de mecanismos de participación, diseño institucional, restitución de tierras, protección, reparación, rehabilitación y atención psicosocial, enfoque de género y derechos de las mujeres y memoria histórica.

A continuación haré una muy breve presentación de los principales puntos discutidos en cada una de las mesas de trabajo. Haremos un ejercicio mucho más detallado de recopilación sistemática de todas estas propuestas que compartiremos con los y las participantes en el evento, y que luego pondremos a disposición del Gobierno Nacional, con el ánimo de que estos aportes sean utilizados en los procesos de reglamentación que están en curso, y en los que se desarrollarán más adelante.

Mesa de participación

Una de las ideas centrales de este ejercicio, si no la esencial, ha sido la manera en la cual las víctimas y sus organizaciones puedan y deban participar, tanto en la implementación como en el diseño de la reglamentación, y puedan encontrar espacios en los que las autoridades rindan cuentas sobre la manera en la cual están cumpliendo con sus funciones. En este sentido, estimo prudente reiterar que este ejercicio no supone una sustitución de la necesidad de una participación e interlocución directa, real y respetuosa de las víctimas y sus organizaciones con las autoridades competentes.

En el marco de las discusiones de esta mesa, se puso de manifiesto el reto de reglamentar la participación. Se concibió el reto más allá de lo establecido en la Ley en el Título VIII con respecto a las Mesas de Participación (artículo 193).

Como elementos a tener en cuenta en este sentido, se destacaron la importancia de participar en el diseño, implementación y seguimiento al cumplimiento de la ley, planes, proyectos y programas. En este sentido, la participación no consiste en la mera información, ni en la validación de iniciativas y esfuerzos una vez concebidos, sino en la construcción colectiva de las propuestas. Por ello reiteramos nuestra convicción de que es necesario que las víctimas y sus organizaciones participen en el proceso de reglamentación que se está desarrollando en la actualidad.

También se requiere como elemento del proceso atender a la condición de las víctimas, el enfoque diferencial, la representación territorial y el establecimiento de reglas de juego claras.

Algunas organizaciones, con propuestas y documentos concretos, enfatizaron la importancia de contar con el universo más amplio posible de víctimas y organizaciones sin discriminaciones, reconociendo la pluralidad de las víctimas, su condición y entorno, con mecanismos que aseguren una participación democrática que efectivamente respete a las minorías y legitime la representatividad, y que existan mecanismos de continuidad con el fin de que sea sostenible. Uno de los mecanismos sugeridos es la creación de espacios de interlocución, nacionales y territoriales, a través de mesas técnicas temáticas.

La importancia de la veeduría y rendición de cuentas de las autoridades también fue objeto de consideración en las discusiones de esta mesa. Uno de los elementos fundamentales de la participación debería ser el enfoque diferencial, entendido en particular como enfoque de género y poblacional. De particular importancia será promover un mecanismo efectivo de consulta previa, asegurando la participación directa de los grupos étnicos en la definición de la política de atención y reparación.

Mesa de institucionalidad

Con relación a los arreglos institucionales que exige la implementación de la Ley de Víctimas, que incluyen desde crear instituciones nuevas hasta reestructurar entidades existentes o asignar nuevas responsabilidades, los representantes de la sociedad civil que participaron en el evento destacaron la importancia de asegurar que el cumplimiento de las funciones derivadas de la ley de víctimas incorpore el enfoque de derechos y se oriente hacia la gestión de servicios enmarcados en la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación.

Con este propósito, será fundamental garantizar un proceso de empalme y transferencia coordinado, en el cual se sistematicen las buenas prácticas –reconocidas como tales por los ciudadanos y ciudadanas- con el fin de construir sobre las experiencias acumuladas y corregir errores, deficiencias y debilidades.

La magnitud de las responsabilidades del Estado frente a las víctimas exige dotar a todas las entidades de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, y exige también un esfuerzo de coordinación especial entre los distintos sectores de la administración pública, entre los niveles nacional, departamental y local, así como dentro de cada una de las instituciones.

En este sentido, la puesta en marcha de todo el sistema institucional que debe implementar la Ley constituye una oportunidad para propiciar un cambio de cultura organizacional, que se refleje en el trato, la atención y el trabajo de los funcionarios y funcionarias, que deben contar también con procesos de formación apropiados, estabilidad profesional y estrategias de cuidado que les permitan manejar los efectos y el desgaste emocional al que ellos también están sometidos.

Una preocupación manifestada por las organizaciones de la sociedad civil se refiere al hecho que se impulse un proceso de reglamentación sin haber definido con claridad quien está a cargo del proceso, con evidentes manifestaciones de poca articulación institucional. En particular se percibe un paralelismo y poca coordinación entre los esfuerzos de Acción Social, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Agricultura.

Mesa de restitución de tierras

En el marco de esta mesa, se discutió el proceso de restitución de manera amplia, sugiriendo la necesidad no solo de entregar tierras, sino de incorporar los medios adecuados para que las víctimas puedan realmente hacer productiva la tierra devuelta o compensada. Esto incluiría ayudas para asegurar la generación de ingresos (créditos fáciles y blandos, proyectos productivos adecuados a los contextos y a la condición de las víctimas), así como la reactivación de la producción (con facilidades de transporte y movilidad) y medidas que tiendan a asentar a la población en las tierras (como educación, salud o vivienda). Se hizo especial hincapié en que los servicios sociales y económicos no se consideren por su naturaleza medidas de reparación, pero sí que sean parte del paquete en el marco de los procesos de restitución.

En este sentido, se recalcó que los procesos de restitución deben ser consecuencia de una lectura previa de las causas y caracterización del despojo que asegure la posibilidad de adecuar medidas para la no repetición.

Además, no pasó desapercibido el papel asignado a las instituciones locales y la necesidad de adecuar y tomar de decisiones de forma coherente en lo referente a la seguridad, planes de desarrollo territoriales o establecimiento y cobro de impuestos prediales.

Por otra parte, la mayoría de las discusiones reflejaron una preocupación por asociar los procesos de restitución de tierras a las llamadas zonas de consolidación, señalando la importancia de que los procesos de restitución no pongan en riesgo la vida o integridad de los beneficiarios y su entorno. La necesidad de protección en este sentido se reflejó en propuestas para que las medidas no solo sean individuales, sino también colectivas, que se fortalezca la capacidad y la aceptación del sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo (cuyos funcionarios y funcionarias también tienen que ser sujetos de

medidas de protección eficaces), dando mayor difusión a sus informes de riesgo y transparencia en las decisiones de implementación de los mismos, y que haya una participación de las comunidades, víctimas y sus organizaciones en todo el proceso de toma de decisiones. La tarea de todos los servicios de información es asegurar la protección es de importancia esencial.

Finalmente, se solicitó aclarar “cuando y cómo” la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá de “un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos contemplados para la restitución”, como exige en artículo 114.

Mesa de Protección

La protección de las víctimas se consideró no solo como elemento esencial para la eficacia y efectividad de la implementación de la Ley, si no como un elemento *sine qua non* para el ejercicio de derechos.

Las discusiones de la mesa partieron de un cierto escepticismo en cuanto a la capacidad de las autoridades para asegurar la protección de las víctimas y sus organizaciones, así como de todos y todas las intervinientes en los procesos previsto en la Ley, sobre todo, en aquellas zonas en las que la presencia de grupos armados ilegales es constante e intrusiva. Se reafirmó que la responsabilidad por la seguridad tiene que corresponder sin ambigüedades a las autoridades. El hecho de que la necesidad obligue a comunidades, víctimas y sus organizaciones a adoptar medidas de autoprotección, no puede eximir a las autoridades de tal responsabilidad. Por supuesto, es importante que la ciudadanía en general sea consciente de que la protección de los derechos de los demás tiene que ser exigida por todas y todos y que no solo debe ser un reclamo de quienes están expuestos al riesgo. Es un derecho y como tal debe ser exigido.

La prioridad de medidas de prevención fue patente. Esto exige superar los comportamientos y decisiones reactivas, realizar análisis de contexto y de situaciones más allá de casos individuales, así como medidas que superen los aspectos policiales. Los conceptos de protección integral, que aparecen en el artículo 32, o seguridad humana no pueden quedarse en términos académicos y deben aterrizar en elementos concretos que tengan un impacto en la mitigación de los riesgos.

Como el desafío fundamental para que cualquier medida de seguridad pueda funcionar, se señaló la superación de la desconfianza en las autoridades encargadas de proporcionar la seguridad. Esta desconfianza es más grave en las regiones y en los casos en los cuales esas mismas autoridades están acusadas de haber participado en la violencia y violación de derechos que ha producido la victimización.

Para la superación de este tremendo desafío se propuso hacer ejercicios de depuración institucional en las autoridades competentes, que ya sea por convicción, corrupción o amenaza, han podido contribuir a la victimización. La tarea de los organismos de control y del ejercicio de la función disciplinaria es fundamental. En este sentido, se consideró

importante que existan criterios de selección de los equipos que adelantan las tareas concretas de protección y que se favorezca la incorporación de mujeres con especial sensibilidad hacia determinados grupos de víctimas y organizaciones en riesgo. Además, se propuso que las y los funcionarios encargados de analizar los riesgos y tomar las medidas para minimizarlos tengan unos criterios objetivos de referencia, evitando en lo posible la subjetividad en la toma de decisiones. Finalmente, el fortalecimiento y la participación de las comunidades, víctimas y sus organizaciones en los procesos de tomas de decisiones, desde el mapeo de los riesgos, los análisis de esos riesgos, hasta la determinación de las medidas a tomar, se considera como de capital importancia.

Mesa de reparación

Ante el abanico tan grande que implica el tema de la reparación en el Ley de Víctimas, las discusiones se centraron en la indemnización por vía administrativa y judicial, las garantías de no repetición y el programa de reparación colectiva.

En general hubo consenso sobre la importancia de una ruta única de acceso a todas las medidas de reparación, siempre y cuando se incluya una visión diferenciada según la violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario sufrida, y la condición de la víctimas (por género, familiar, edad, origen étnico o situación de discapacidad). En este sentido, se expresó preocupación por el proceso de adecuación de las bases de datos existentes en un registro único, y por la necesidad de hacer actualizaciones y evitar la re victimación en este proceso.

El Gobierno tiene la obligación de reglamentar dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la Ley “el trámite, procedimientos, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas” (artículo 132).

Las discusiones que tuvieron lugar reflejaron la necesidad de establecer una adecuada valoración del daño en las tablas de indemnización, a la luz de la experiencia de la implementación del Decreto 1290, por el cual se creó en 2008 un programa similar. Al mismo tiempo, los representantes de la sociedad civil mostraron una gran preocupación porque la aceptación de la indemnización administrativa no impida el acceso a la vía judicial para obtener también reparación. En este sentido, es importante que la regulación del llamado “contrato de transacción” (por el que una víctima puede recibir una indemnización más alta, si consiente, de forma expresa y voluntaria, que tal indemnización incluye todas las sumas debidas para reparar el daño recibido), asegure que la víctima consiente de manera realmente voluntaria y que las y los funcionarios encargados no ejercen ningún tipo de coacción ni de incentivo indebido. Asimismo, se reclamó que los protocolos a diseñar sean ágiles, didácticos, precisos en tiempos, con poca tramitología y burocracia.

Las garantías de no repetición recogidas en el artículo 149 se consideraron adecuadas, pero se expresaron ciertas dudas con respecto a su reglamentación a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral. No parece estar muy claro si esta reglamentación será parte

del Plan o una vez adoptado el Plan, se reglamentaran. En ambos casos, se reclamó una real participación de las víctimas y sus organizaciones en la materialización práctica y concreta de estas medidas.

Si bien hubo un consenso en la necesidad de un programa de reparación colectiva, se sugirió que se considerara en un plano de igualdad con respecto a la indemnización individual. Ambas son importantes para la verdadera reparación de las víctimas.

Finalmente, se destacó la gran necesidad de capacitar adecuadamente a los y las funcionarias responsables de estas tareas, no solo para orientar e informar de forma eficaz a víctimas, sus familias y organizaciones, sino también en la necesaria sensibilización. Las víctimas reclaman sus derechos, no mendigan ni solicitan asistencia.

Mesa de rehabilitación

La rehabilitación y la atención psicosocial, como uno de los componentes de la reparación integral, y la obligación del Gobierno Nacional de crear un programa de rehabilitación con medidas individuales y colectivas, centraron la reflexión en esta mesa.

Hubo un reconocimiento del número importante de organizaciones no gubernamentales con un conocimiento acumulado sobre la incorporación del enfoque psicosocial en la prestación de servicios. Estas organizaciones expresaron sin excepción su disponibilidad para compartir su experiencia y apoyar al Ministerio de la Protección Social en el diseño y en la implementación de este programa.

Se enfatizó que la rehabilitación se debe entender en un sentido amplio, es decir, que además del componente de atención en salud física y en salud mental, la rehabilitación debe incorporar una estrategia integral orientada hacia el proceso de reconstrucción de los proyectos de vida individuales, familiares y sociales de las personas, y hacia el proceso de recuperación de la autonomía personal, laboral y social.

El acceso a este programa no puede depender del régimen de atención en salud al que esté afiliada cada persona, ni puede limitarse a la oferta del sistema general de salud. Además de ser un programa en sí mismo, la rehabilitación (entendida en este sentido amplio) y el enfoque psicosocial, deberían ser parte de todos los demás componentes de la reparación. Así por ejemplo, los procesos de restitución de tierras, los procesos judiciales, el otorgamiento de indemnizaciones administrativas, y todos los demás aspectos de la reparación, deberían incluir el enfoque psicosocial desde el comienzo y como parte integral de cada proceso.

También se hicieron referencias a la importancia de la formación de los funcionarios y funcionarias sobre el impacto del conflicto armado en las víctimas, para que puedan estar en condiciones de tener una “interacción” con ellas (a diferencia de una “intervención”) con el fin de que sean sensibles y respondan adecuadamente a las necesidades específicas de edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, y condiciones geográficas, sociales y culturales, de cada persona o grupo de personas.

Sobre las responsabilidades institucionales para poner en marcha el programa de rehabilitación y para incorporar el enfoque psicosocial en los demás componentes de la reparación, los representantes de la sociedad civil recomendaron que se cree en el Ministerio de la Protección Social una unidad nueva, encargada específicamente de este programa, por fuera del sistema de seguridad social, que cuente con las capacidades técnicas y financieras necesarias para darle sostenibilidad a la atención y para coordinar con los demás sectores del Estado. Los representantes de la sociedad civil se refirieron también a la importancia de que el Ministerio de la Protección Social asuma un papel más activo en el proceso de reglamentación de la ley de víctimas, en coordinación con los Ministerios de Justicia y Agricultura y con Acción Social.

Mesa de derechos de las mujeres y enfoque de género

Las organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos de las mujeres y enfoque de género se refirieron a los elementos que se deberían tener en cuenta para garantizar la transversalidad del enfoque de género en todo el proceso de reparación y aportaron un gran número de ideas concretas muy valiosas para ser tenidas en cuenta en cada uno de los programas, que transmitiremos de manera detallada posteriormente.

Entre estas ideas que surgieron, me permito ahora resaltar la necesidad de incluir estrategias de difusión e información para las víctimas de violencia sexual y estrategias de formación para los funcionarios y funcionarias que reciben víctimas de este delito, en las cuales se incorporen los elementos desarrollados por la Corte Constitucional. Esto debe incluir las garantías de confidencialidad, el trato digno, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo cuando corresponda, la asesoría jurídica y el apoyo psicosocial.

Frente a los procesos judiciales por delitos de violencia sexual, se recomienda establecer mecanismos que garanticen la aplicación correcta por parte de fiscales y jueces de las normas especiales sobre prueba establecidas en la Ley de Víctimas, en concordancia con las establecidas en la Ley 1257 de 2008 sobre violencia basada en género. También es importante retomar y no perder en este proceso el esfuerzo de la Defensoría del Pueblo de contar con personas especializadas para proporcionar asistencia judicial a mujeres.

Las medidas de protección con enfoque de género y con lineamientos específicos para las mujeres (individualmente consideradas y considerando también a su grupo familiar), y para los niños y las niñas, también fueron objeto de preocupación. Las representantes de las organizaciones de mujeres señalaron la necesidad de desarrollar un enfoque que privilegie la prevención, con tiempos de respuesta ágiles y procesos de concertación de las medidas de protección y acompañamiento adecuados.

Con relación a los procesos de restitución de tierras, se recomendó hacer un diagnóstico de los despojos que han afectado específicamente a las mujeres y de las modalidades de esos despojos, que incluyen violencia sexual, coacción y persecución a mujeres con VIH, feminicidios, corrupción administrativa en detrimento de los derechos de organizaciones de

mujeres campesinas beneficiarias de títulos colectivos, entre otros, con el fin de diseñar una respuesta adecuada a esas modalidades.

Así mismo, recomendaron desarrollar medidas específicas para los procesos de restitución que involucren niños y niñas huérfanos, con garantías efectivas de recuperación integral.

Frente a los mecanismos de participación, se recomendó que en los foros regionales previstos por el Gobierno para los próximos dos meses se incluyan mecanismos de trabajo explícitamente orientados a recoger los aportes de las mujeres, que los procesos de consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes incluyan de manera específica la consulta con mujeres indígenas, afros y de otros grupos étnicos, y que en los Comités Departamentales de Justicia Transicional, y las Mesas de Participación previstas en la Ley, se asegure una participación de 50% de mujeres.

Mesa de memoria histórica

En esta mesa se resaltó la importancia de asegurar un proceso de transición y empalme cuidadoso, que permita recoger el trabajo adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en las regiones, así como el trabajo de su Grupo de Memoria Histórica. También se recogió la importancia de que el nuevo Centro de Memoria Histórica previsto en el artículo 146 cuente con los recursos financieros necesarios, tanto a nivel central como a nivel regional, y que pueda cumplir sus funciones con independencia y autonomía.

Con ese propósito, se recomienda crear un Consejo Asesor del Centro de Memoria Histórica, conformado por académicos, organizaciones de víctimas y representantes de la sociedad civil de las regiones.

Así mismo, se recomienda que los procesos de reconstrucción de memoria cuenten con la participación real de las víctimas, y que incorporen el enfoque diferencial y de género, y la dimensión individual, familiar y colectiva.

Sobre la difusión y divulgación de la memoria histórica, se recomendó acudir a mecanismos no tradicionales o alternativos, incluyendo expresiones artísticas.

Se destacó la importancia del trabajo regional, y se sugirió la creación de días regionales de memoria, que coincidan con fechas emblemáticas para cada región, y la realización de un inventario de iniciativas no oficiales como insumo para la construcción de centros de memoria.

La creación de archivos con los documentos sobre memoria histórica debería utilizar la tecnología adecuada para prevenir su deterioro, e incorporar los documentos de las regiones. Para ello, sería útil recoger las lecciones aprendidas, tanto a nivel nacional en la Procuraduría y en la implementación de la Ley 975, como las experiencias internacionales.

Conclusiones

No puedo terminar esta intervención sin hacer un reconocimiento a todos y todas las participantes del ejercicio del lunes 19 de septiembre, tanto a las víctimas como a sus organizaciones, así como a otras organizaciones de la sociedad civil, las entidades del Estado (mencionando que habría sido útil haber podido contar con una presencia más numerosa en las mesas de discusión) y los miembros del honorable cuerpo diplomático y la comunidad internacional.

Su participación reafirma la necesidad de tomar en cuenta sus opiniones, como exigencia de un enfoque de derechos humanos.

Esto exige un proceso de consultas amplio, genuino y transparente con toda una serie de agentes nacionales y representantes de la sociedad civil en general, y con las víctimas y sus organizaciones en particular.

El evento que juntos construimos el pasado lunes, es un punto de partida y no de llegada. No sustituye ni exime al Gobierno de su responsabilidad de entablar un diálogo fructífero, real y directo con las víctimas y sus organizaciones.

Como ha dicho el Secretario General de las Naciones Unidas, "las mejores experiencias en la justicia de transición se deben en gran parte a la cantidad y la calidad de las consultas celebradas públicamente y con las víctimas".

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso que la participación y las consultas con las víctimas y sus organizaciones no deben confundirse con las actividades de divulgación. No están concebidas como simples canales de información de una sola vía para mantener informada a la comunidad de la labor que se esté realizando. Tampoco pueden ser meros ejercicios de relaciones públicas. Son más bien una forma de diálogo vigoroso y respetuoso, mediante el cual se brinda a las partes consultadas la oportunidad de expresarse libremente, en un entorno seguro, con el fin de configurar o mejorar la formulación de los programas de justicia de transición.

En el marco colombiano, además, la articulación, madurez y protagonismo de las víctimas y sus organizaciones exige la realización de una verdadera democracia participativa.

Para la efectiva y legítima implementación de la Ley, las víctimas y sus organizaciones tienen que participar, y participar de verdad, como ciudadanos y ciudadanas, como sujetos de derecho, como constructores de la democracia, de la paz y la reconciliación, en todos los estadios de formulación, diseño, implementación y seguimiento. El proceso de reglamentación no puede hacerse a sus espaldas. No es suficiente informar *a posteriori* o validar las propuestas ya concebidas y construidas. Hacerles partícipes de los procesos desde su inceptión vale la pena. Cuenten con las Naciones Unidas para esta tarea.

Muchas gracias.

